



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

**SENTENCIA INTERLOCUTORIA**

**EXPTE. NRO: 11682/2018**

**AUTOS: “KAURY S.R.L. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Buenos Aires,

**AUTOS Y VISTOS:**

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 45/69 contra la Resolución N° 39/2015 (DV TJSO-DI RRSO) que desestima la impugnación administrativa contra las actas de inspección labradas bajo la A.P N° 141134 que confirma la deuda intimada por responsabilidad solidaria en los términos del art. 30 de la LCT.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 90, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la deuda determinada, en los términos del art. 15 de la ley 18.820. Asimismo informa que, en sustitución el contribuyente acompañó póliza de seguro de caución por la suma de \$ 63.533,67 a favor de la AFIP.

Que la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la imposibilidad de afrontar el pago de la exigencia prevista en la norma citada. Asimismo, deduce inconstitucionalidad del “solve et repete”, y manifiesta que existe una flagrante violación del derecho de defensa en juicio y prejuzgamiento. Señala además un evidente propósito persecutorio del organismo recaudatorio. En sustitución, ofrece seguro de caución.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como



requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

Que resulta importante destacar que el seguro de caución contratado y toda vez que con arreglo al criterio de esta Sala III, sólo ha sido admitido como sucedáneo del mentado requisito del depósito previo en el caso de haberse alegado y probado su imposibilidad o extrema dificultad, lo que no acontece en el caso de autos, el mismo no resulta suficiente. (Conf. SI N° 77728 del 27/12/2002, "SUPERMERCADOS CACERES S.R.L C/AFIP-DGI S/ IMPUGNACION DE DEUDA " Expte N° 9433/00; SI N° 88571 del 24/10/2005 en autos "ADEXA S.A C/AFIP S/ IMPUGNACION DE DEUDA" Expte N° 5609/04 ; y SI 90294 del 27/2/2006 en autos "ORIGENES AFJP S.A C/AFIP S/IMPUGNACION DE DEUDA" Expte N° 3829/2005 entre otras; y más recientemente sentencia del 5/10/2022 recaída en los autos "GASTRO EVENTOS S.A C/ AFIP S/ IMPUGNACION DE DEUDA".

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar formalmente inadmisibile el recurso interpuesto; y 2) Sin costas en la Alzada.

Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.).

Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

**SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 RJN).**

